

DEL DERECHO DE PETICIÓN A LA TRANSPARENCIA DIGITAL EN COLOMBIA

THE RIGHT TO PETITION AND DIGITAL TRANSPARENCY IN COLOMBIA

AUGUSTO HERNÁNDEZ BECERRA

Profesor Emérito de la Universidad Externado de Colombia. Universidad Externado de Colombia (Bogotá, Distrito Capital, Colombia).
ORCID: [<https://orcid.org/0000-0003-0863-1264>].
hernandezaugusto@hotmail.com

Recibido/Received: 12.08.2021/September 12th, 2021
Aprovado/Approved: 20.11.2021/November 20th, 2021

ÁREAS DO DIREITO: Administrativo; Processual

RESUMEN: El texto demuestra del concepto contemporáneo de transparencia a partir de sus actuales instrumentos en Colombia que configuran el derecho ciudadano de petición en la era de la ciudadanía digital. La transparencia es un derecho político, no es simplemente un principio de organización y funcionamiento eficiente de la administración. Es un principio que se realiza a través de derechos de contenido esencialmente político: libertades de opinión y expresión, derechos de asociación política y civil, derecho de petición, derechos a la información, a la participación, a la oposición y al control políticos.

PALABRAS CLAVE: El derecho de petición – Transparencia y publicidad – Ciudadanía digital.

ABSTRACT: The text shows the contemporary concept of transparency based on its current instruments in Colombia that configure the right to petition in the era of digital citizenship. Transparency is a political right, and it's not just a principle of organizations and efficient operation of the public administration. It is a principle that is realized through rights of essentially political content: freedom of opinion and expression, rights of political and civil association, right of petition, rights to informations, participation, opposition and political control.

KEYWORDS: The right to petition – Transparency and publicity – Digital citizenship.

SUMÁRIO: Introdução. I. Instrumentos precursores de la transparencia. 1. El derecho de petición. 2. Los procedimientos administrativos y el principio de publicidad. 3. La Constitución de 1991. II. La transparencia en las instituciones y los procedimientos administrativos actuales. 1. Formalización legal de la transparencia como principio de la función administrativa. 2. La actividad administrativa pertenece al dominio público. 3. La información estatal es pública y la información sobre las personas es privada. 4. Publicidad. 5. Excepcionalidad de la reserva. Informaciones y documentos reservados. 6. Medios electrónicos y ciudadanía

digital. 6.1. Hacia un futuro digital en el funcionamiento del Estado. 6.2. Procedimiento administrativo digital obligatorio. 6.3. Transparencia digital. Reflexión final. Referencias.

INTRODUCCIÓN¹

Para remover la regla de secreto en la actividad del Estado e introducir el derecho ciudadano de acceder a todos los documentos e informaciones en poder de las autoridades, ha sido necesario superar milenios de ejercicio autocrático del poder y desarrollar las aún precarias e inciertas instituciones democráticas, de tan reciente aparición en la historia de la humanidad.

Los últimos reductos del despotismo en el Estado contemporáneo son el ejercicio de facultades discrecionales por parte de las autoridades y el secreto en que tradicionalmente se ha querido envolver la actividad del Estado. Tal vez no sea posible extirpar por completo estos atributos exorbitantes que parecen ser la última ratio de la política, pues sin algo de discrecionalidad y de reserva tal vez no sería posible gobernar. Pero esas potestades públicas, que en el pasado fueron dogma y práctica general, quintaesencia de la razón de Estado, han debido reducirse considerablemente en la era de la democracia para hacer compatible el gobierno de las sociedades con la libertad, la justicia y la igualdad que pregona el estado constitucional de derecho.

El Estado moderno es democrático y, por ende, transparente en todas sus actuaciones. En este sentido prepara, elabora y ejecuta sus actos de cara a la sociedad, que no se conforma hoy con menos de participar, controlar, orientar la conducta del Estado y defender las libertades públicas. La transparencia, hoy, no es simplemente un principio de organización y funcionamiento eficiente de la administración. Es un derecho político. O, en otras palabras, es un principio que se realiza a través de derechos de contenido esencialmente político: derecho de petición, a la información, a la participación, a la oposición y al control político.

Este artículo analiza, en la primera parte, las instituciones que desde las primeras Constituciones colombianas y sucesivos desarrollos legales formaron progresivamente los instrumentos precursores de la transparencia. La segunda parte trata del concepto contemporáneo de transparencia a partir de sus actuales instrumentos en Colombia, que configuran el derecho ciudadano “a saber” de lo

1. Como citar esse artigo/How to cite this article: BECERRA, Augusto Hernández. Del derecho de petición a la transparencia digital en Colombia. *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura – RDAI*, São Paulo, v. 6, n. 20, p. 00-00, jan./mar. 2022. DOI: <https://doi.org/10.48143/rdai.20.ah.becerra>.

público y a intervenir en la conformación, ejercicio y control del poder político, como predica el artículo 40 de la Constitución, en la era de la ciudadanía digital.

I. INSTRUMENTOS PRECURSORES DE LA TRANSPARENCIA

A lo que modernamente se entiende por transparencia se llegó en Colombia mediante una lenta evolución que tuvo como punto de partida, comenzando el siglo XIX, un clima cultural basado en la indiscutible supremacía del Estado sobre la sociedad, la superioridad jerárquica e incluso social de los funcionarios sobre los ciudadanos, y con ello la convicción de la desigualdad natural existente entre las personas comunes y el poder político, y el celoso secreto como principio del funcionamiento interno de las oficinas estatales, que erigía un muro insalvable entre la administración y “los administrados”, esos destinatarios cosificados de la acción gubernamental.

Contra estas barreras, a partir de la incipiente conciencia de los derechos individuales y del lento desarrollo de la democracia representativa, se inicia el itinerario hacia la transparencia, que encuentra firme soporte, desde comienzos del siglo XIX, en el reconocimiento constitucional del derecho de petición. A este derecho se sumaron luego otros atributos y protecciones ciudadanas frente al Estado. Se reguló entonces el derecho a obtener copia de documentos oficiales, y el de solicitar certificados sobre el estado de los trámites de interés personal en las oficinas públicas. Luego se reglamentaron los procedimientos administrativos, cada vez en forma más prolija. Y se hizo obligatorio notificar personalmente los actos administrativos a los interesados, a quienes se les reconoció el derecho de interponer recursos contra dichos actos en sede administrativa, y el derecho a la impugnación judicial de los actos administrativos, a lo cual contribuyó decisivamente en Colombia el establecimiento de la jurisdicción² de lo contencioso administrativo en 1913.

Gracias a esta creciente panoplia de herramientas democráticas se fue abriendo el funcionamiento interno de las oficinas del Estado al conocimiento ciudadano. Hoy el ciudadano no solo conoce la fisiología de esos despachos y puede saber de sus motivaciones y propósitos. Puede controlar y orientar el sentido de las decisiones finales. Incluso las puede corregir. Evidentemente participa. Y mediante su activa participación en el proceso de formación de las decisiones administrativas se convierte en coadministrador. A su vez el funcionario, antiguamente hierático y despótico, suaviza el trato a los solicitantes y peticionarios, y ha descendido de su imaginario pedestal para transformarse en servidor público.

2. Ley 130.

1. *El derecho de petición*

Hace apenas algo más de dos siglos elevar peticiones a la autoridad se consideraba una conducta atrevida y por fuera de la ley. El autor se exponía a ser enjuiciado y sufrir prisión. En Inglaterra, donde se libraron las primeras grandes luchas modernas contra el despotismo y en defensa de la libertad, la Declaración de Derechos de 1689 proclamó entre otros el siguiente: “Que es de derecho que los súbditos peticionen al Rey, y que todos los autos de prisión y enjuiciamiento a causa de tales peticiones son ilegales.” La constitución de Estados Unidos lo acoge en la primera enmienda y la francesa de 1791 proclama como un derecho natural el derecho de dirigir peticiones firmadas individualmente a las autoridades constituidas.

Naturalmente, de acuerdo con el ideario liberal que inspira a la novel república, las constituciones colombianas del siglo XIX consagraron todas el derecho de petición. La del Estado de la Nueva Granada, de 1832, lo expone así en el artículo 203, con algunas reticencias propias de la época:

“Todos los granadinos tienen la facultad de reclamar sus derechos ante los depositarios de la autoridad pública, con la moderación y respeto debido; y todos tiene el derecho de representar por escrito al Congreso o al Poder Ejecutivo cuando consideren conveniente al bien público; pero ningún individuo o asociación particular podrá hacer peticiones a las autoridades en nombre del pueblo, ni menos arrogarse la calificación de pueblo. Los que contravinieren a esta disposición serán juzgados conforme a las leyes.”

El anterior texto se conserva casi idéntico en el artículo 164 de la Constitución de 1843 (República de la Nueva Granada). La de 1853, de la Nueva Granada, adopta mayores cautelas en el artículo 5º, quizá para prevenir el peligro de rebelión o asonada a propósito de una petición. Según este artículo la república garantiza a todos los granadinos

“8º. El derecho de reunirse pública o privadamente, sin armas, para hacer peticiones a los funcionarios o autoridades públicas, o para discutir cualesquiera negocios de interés público o privado, y emitir libremente y sin responsabilidad ninguna su opinión sobre ellos. Pero cualquiera reunión de ciudadanos que al hacer sus peticiones o al emitir su opinión sobre cualesquiera negocios se arrogue el nombre o la voz del pueblo, o pretenda imponer a las autoridades su voluntad como la voluntad del pueblo, es sediciosa; y los individuos que la compongan serán perseguidos como culpables de sedición. La voluntad del pueblo solo puede expresarse por medio de los que lo representan, por mandato obtenido conforme a esta Constitución.”

La Constitución de 1858, de la Confederación Neogranadina, morigeró el tono y hace considerablemente más amplio este derecho en el artículo 56 así:

“La Confederación reconoce a todos los habitantes y transeúntes: ... 12. El derecho de obtener resolución en las peticiones que por escrito dirijan a las corporaciones, autoridades o funcionarios públicos sobre cualquier asunto de interés general o particular.”

La Constitución federal de 1863, de los Estados Unidos de Colombia, conserva el texto de 1858 en el artículo 15 numeral 12, donde se agrega que la resolución de las peticiones por parte de las autoridades debe ser “pronta”. Se llega así al clásico texto de la Constitución de 1886, que otorga este derecho a “toda persona” y subraya que las peticiones deben ser “respetuosas”: “Artículo 45. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.”

2. *Los procedimientos administrativos y el principio de publicidad*

La regulación legal de los procedimientos internos de la administración obedeció principalmente al propósito de ordenar y hacer más eficiente el funcionamiento interno de las oficinas del Estado. Estos primeros reglamentos, aun cuando ideados para para el trabajo disciplinado de la burocracia, abrieron sin embargo una estrecha rendija para que el público pudiera obtener de la autoridad algunas informaciones, certificaciones y copias de documentos, todos en principio sometidos a estricta reserva. La transparencia del futuro apenas se insinuaba.

Poco a poco el principio universal de reserva o secreto administrativo de entonces, cedería ante el principio universal de publicidad propio de nuestros días. Sucesivas revisiones y mejoras al procedimiento administrativo fueron ensanchando el acceso y participación de los ciudadanos, y así se perfeccionó el régimen de los recursos administrativos, de las notificaciones de los principales eventos dentro del procedimiento, de los impedimentos y recusaciones, de la comunicación a terceros, de la instancia de defensa y pruebas, con todo lo cual la “caja negra” de la administración finalmente quedó abierta para satisfacer la necesidad de conocimiento e información de todos los ciudadanos.

En este sentido es interesante anotar que ya el Código de Organización Política y Municipal, adoptado mediante la Ley 149 de 1888, se ocupó de regular el derecho de acceso a la información en el artículo 357, que reconocía a los ciudadanos el derecho de solicitar copia de documentos gubernamentales, a menos que la ley expresamente no lo permitiera, en los siguientes términos:

En efecto, la Ley 1437 impuso a la administración la obligación de “adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos” (artículo 7º numeral 8), como también el deber de contar con una sede electrónica (artículo 60) que le permita realizar sus procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos (artículo 63). En consonancia con todo ello la Ley 1437 claramente estipuló que los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos y, para garantizar la igualdad de acceso a la administración, dispuso que “la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos”, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos (artículo 53).

La Ley 1437 dejó completamente estructurado el procedimiento administrativo electrónico: las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación (artículo 56); las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos (artículo 57); cuando el procedimiento administrativo se adelante utilizando medios electrónicos, los documentos deberán ser archivados en este mismo medio (artículo 58), y se podrán organizar todas las actuaciones en expedientes electrónicos (artículo 59). De otra parte, la Ley 1437 de 2011 reconoció a las personas en el artículo 54, y no solo a los ciudadanos, un nuevo derecho, propio de la era tecnológica que estamos viviendo, y que dice así: “Toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos”.

La norma agrega que, si la persona utiliza el medio electrónico, “las autoridades continuarán la actuación por este medio”. Este derecho, así formalizado, comporta para la administración un deber correlativo: el de poner al alcance de las personas los medios electrónicos necesarios para acceder a los servicios y adelantar por esta vía todas sus diligencias y trámites. Lo cual no deja de tener ventajas para la administración pues, por ejemplo, el artículo 67 de la Ley 1437, que describe la forma como se deben realizar las notificaciones personales, prevé que esta pueda hacerse “por medio electrónico”. La presencia física de la persona, que siempre se exigió para poder hacer la notificación personal, que por eso se llama así, ha sido reemplazada, gracias a la magia del internet, por un nuevo tipo de presencia, la presencia virtual.

La utilización de medios electrónicos en los procedimientos administrativos precipitó cambios cualitativos, pues comenzaron a desaparecer las ventanillas atendidas por funcionarios, las filas de ciudadanos a la espera de realizar sus diligencias, las tradicionales congestiones en las oficinas públicas y las habituales demoras en los trámites oficiales. A partir de la Ley 1437 de 2011 cayó en desuso

la noción de oficina pública como espacio físico destinado a la recepción de sufridos “administrados”. Perdió sentido el concepto de “horas de atención al público” en dichos lugares, pues la atención de la administración al público, ahora por vía electrónica, nunca más será de tan solo unas cuantas horas diurnas, sino de 24 horas diarias. En fin, la definición legal de los términos para realizar oportunamente todo tipo de actuación ante la administración debió revisarse, pues de acuerdo con el artículo 54 las actuaciones que realice toda persona a través de correo electrónico “se entenderán hechas en término siempre que hubiesen sido registradas hasta antes de las doce de la noche y se radicarán el siguiente día hábil.”

Los extraordinarios desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones han revolucionado en los últimos años la estructura y funcionamiento de las organizaciones, tanto en el sector privado como en el público, así como las relaciones de estas organizaciones con los clientes, usuarios y ciudadanos en general. Al ritmo de las innovaciones se han actualizado las normas jurídicas, se ha reestructurado la administración y se han multiplicado las herramientas tecnológicas y organizacionales para la transparencia.

6.3. *Transparencia digital*

El derecho de acceso a la información pública, regulado en varias leyes desde hace más de cincuenta años, encontró en las Leyes 1437 de 2011 y 1712 de 2014 enérgicos desarrollos normativos. El derecho de acceso a la información pública implica que las entidades no deben limitarse a proveer la información por impulso de los ciudadanos ejerciendo su derecho, sino que tienen la obligación de divulgarla por su propia iniciativa, en forma rutinaria, actualizada, accesible y comprensible, y garantizar que las personas en condición de discapacidad y los diferentes grupos étnicos y culturales puedan obtener información de su interés. Esto es lo que se viene denominando transparencia pasiva y transparencia activa. Dichas leyes promueven la transparencia en la gestión de las entidades públicas de todos los órganos del Estado en el orden nacional y territorial. Y empoderan a los ciudadanos para que ejerzan control sobre la gestión de bienes y recursos públicos por parte de la administración.

Específicamente la Ley 1712 de 2014 impuso a las entidades públicas, entre otras, las siguientes obligaciones: poner a disposición del público, en la página web, toda la información institucional y proveer apoyo y asistencia en relación con trámites y servicios que se presten por medios electrónicos y presenciales; desarrollar criterios diferenciales de accesibilidad que permitan a poblaciones específicas acceder a la información pública en sus diversos idiomas y lenguas, así como a la población en condición de discapacidad; publicar las contrataciones en

curso con un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública; asegurar que sus sistemas de información electrónica estén alineados con la estrategia de Gobierno en Línea para facilitar el acceso y la reutilización de la información tanto por las entidades públicas como por la ciudadanía.

Son numerosas las herramientas tecnológicas desarrolladas por la administración para hacer efectiva la ciudadanía digital, mediante el contacto virtual ciudadano-autoridad, la creación de páginas web por parte de todas las entidades públicas, nacionales y territoriales, y la popularización de los teléfonos celulares. Gracias a la densa dotación ciudadana e institucional de medios electrónicos, ha sido posible desarrollar importantes herramientas tecnológicas para la interlocución sociedad- estado, con gran beneficio para las personas y también para las instituciones. En este aspecto cabe mencionar, entre otras, además de las páginas web singulares de más de mil quinientas instituciones públicas, idóneas para interactuar con los ciudadanos, el Portal del Estado Colombiano (www.gobiernoenlinea.gov.co), punto web que unifica el acceso a la información, los trámites y los servicios a cargo de las entidades del Estado.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es responsable de coordinar en la administración pública la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, que tiene por objeto desarrollar un Estado más eficiente, transparente y participativo y habilitarlo para prestar mejores servicios mediante el aprovechamiento de las tecnologías informáticas y comunicativas. El diseño, promoción e implementación de la política pública de acceso a la información pública está a cargo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).²⁸

Recientemente, mediante la Ley 1955 de 2019 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que entre sus objetivos se propone eliminar las barreras de acceso a los trámites en todo el territorio nacional y lograr la atención de las demandas y solicitudes de los ciudadanos en forma digital y automática. Igualmente apunta a la transformación digital de Colombia, definiendo las acciones que se requieren para impulsar la transformación digital de la Administración

28. Entre muchas otras páginas web sobresalen en las políticas de gobierno en línea y transparencia: <http://www.anticorruptcion.gov.co>, <http://www.contratacionenlinea.co>, www.colpensiones.gov.co, www.defensajuridica.gov.co, <http://www.atencionyreparacion.gov.co>, <http://www.portalterritorial.gov.co>, <http://www.banrep.gov.co>, <http://www.creg.gov.co>, <http://www.dps.gov.co>, etc.

Pública y la digitalización y automatización masiva de trámites, con el objetivo de que a mediano plazo todos los trámites sean digitales.

El Decreto 2106 de 2019²⁹ ordenó modernizar el funcionamiento de la administración para implantar trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados, modernos y digitales. El capítulo II de esta ley, que se intitula “Transformación Digital para una Gestión Pública Efectiva”, estableció para la administración el deber y para los ciudadanos el derecho, de utilizar medios electrónicos mediante el modelo de Servicios Ciudadanos Digitales.³⁰ los Servicios Ciudadanos Digitales se componen de procedimientos y soluciones tecnológicas que inducen en el Estado su transformación digital, en interacción con los ciudadanos, para así garantizarles el derecho a la utilización de medios electrónicos en sus actuaciones ante la administración.³¹

REFLEXIÓN FINAL

Estrategia central de la reforma política impulsada por la Constitución de 1991 para modernizar el sistema político y profundizar la democracia colombiana, consistió en introducir numerosos procedimientos de participación ciudadana en complemento de las instituciones propias de la democracia representativa. Los ciudadanos, participando, hacen de la democracia una vivencia permanente y no ocasional, ponen de presente a las autoridades sus deberes de servicio y las obliga a comunicarse, a consultar, rendir cuentas y dar explicaciones de sus actos. Es evidente, por tanto, que la participación contribuye a la transparencia y la democracia, y que la presencia de mucha luz ahuyenta la corrupción.

La sociedad participativa se organiza y se moviliza para reclamar y defender sus derechos y para impulsar iniciativas mediante acción directa. No hay secreto o razón de Estado que pueda resistirse al pueblo movilizado por su propio impulso. La ciudadanía digital surgida de la revolución tecnológica y en alguna forma precipitada por la pandemia del Covid 19, ha convertido el foro público del internet y las redes sociales en instrumentos con capacidad demostrada para

29. “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”.

30. V. Decreto 620 de 2020 “Por el cual se establecen los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales”.

31. La Ley 2052 de 2020, “Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones”, reitera el deber que tiene el Estado de automatizar y digitalizar la gestión interna de trámites.

galvanizar en forma casi instantánea la voluntad colectiva en torno a temas de interés general y para pasar casi inmediatamente a la acción. Los internautas están redescubriendo la democracia directa bajo la modalidad de la participación virtual que, por su carácter masivo e instantáneo, sin dificultad puede permitirse la licencia de prescindir de la institucionalidad a través de la cual tendrían que tramitarse, con parsimonia y morosidad, las iniciativas ciudadanas.

La ley, al reconocer el derecho de todas las personas a relacionarse con la administración mediante la utilización de medios electrónicos, propugna una cultura de transparencia acorde con la modernización del Estado y la participación ciudadana, fortalece la lucha contra la corrupción y reinventa la institucionalidad. En efecto, una política pública de transparencia implica una profunda transformación de la cultura administrativa y de la organización estatal que rendirá frutos en términos de legitimación de las instituciones e, incluso, en crecimiento económico y desarrollo social.

La primera víctima de la opacidad en el Estado es la libertad. Al defender y propugnar la transparencia, se conjura la opresión y se crean condiciones propicias al respeto de los derechos humanos y la vigencia de la democracia. El Estado moderno es democrático y, por ende, transparente. La transparencia, hoy, no es simplemente un principio de organización y funcionamiento eficiente de la administración. Es un derecho político. O, en otras palabras, es un principio que se realiza a través de derechos de contenido esencialmente político: libertades de opinión y expresión, derechos de asociación política y civil, derecho de petición, derechos a la información, a la participación, a la oposición y al control políticos.

REFERENCIAS

- Alberto Donadio. *La llave de la transparencia. El periodismo contra el secreto oficial*. Sílabá Editores, Bogotá, 2012.
- CIDH – OEA. *El derecho de acceso a la información pública en las Américas. Estándares Interamericanos y comparación de marcos legales*. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2012.
- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conservó y fortaleció este mecanismo de control judicial.
- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de mayo de 1976, expediente 2390.
- Contrato Social, libro tercero, capítulo XV.
- Corte Constitucional, sentencias C-645 de 2000, C-508 de 2002, C-128 de 2003, C-872 de 2003, C-293 de 2007, T-157 de 2010, T-451 de 2011, C-076 de 2012, C-711 de 2012, C-274 de 2013, etc.

Decreto 103 de enero 20 de 2015.

Decreto 620 de 2020 “Por el cual se establecen los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales”.

El artículo 26 de la Ley 1437 de 2011.

<http://www.anticorruccion.gov.co>.

<http://www.atencionyreparacion.gov.co>.

<http://www.banrep.gov.co>, <http://www.creg.gov.co>, <http://www.dps.gov.co>, etc.

<http://www.contratacionenlinea.co>.

<http://www.portalterritorial.gov.co>.

Sentencia C-491 de 2007.

Sentencia T-511 de 2010.

www.colpensiones.gov.co, www.defensajuridica.gov.co.



PESQUISA DO EDITORIAL



ÁREAS DO DIREITO: Administrativo; Processual

Veja também Doutrina relacionada ao tema

- Rémorra de la reclamación administrativa previa a las pretensiones contra el estado, de Carlos E. Delpiazzo – *RDAI* 15/261-278.

REVISTA DE
**DIREITO ADMINISTRATIVO,
INFRAESTRUTURA,
REGULAÇÃO E COMPLIANCE**

*Journal of Administrative Law, Infrastructure,
Regulation and Compliance*

Ano 6 • n. 20 • jan./mar. 2022
N. 6 • Issue 20 • Jan./March 2022

REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUTURA, REGULAÇÃO E COMPLIANCE

Journal of Administrative Law, Infrastructure, Regulation and Compliance

Ano 6 • n. 20 • jan./mar. 2022

N. 6 • Issue 20 • Jan./March 2022

Coordenação

AUGUSTO NEVES DAL POZZO

RICARDO MARCONDES MARTINS

Editor-Chefe

ALEXANDRE GODDY DOTTA

Conselho Editorial

Editorial Board

**Presidente do Conselho: Roberto Mangabeira Unger –
Harvard University Law School (Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos)**

Adrián Gutiérrez (Universidad de la República Oriental del Uruguay – UDELAR – Montevidéo – Uruguai) – Alejandro Canónico Sarabia (Universidad Católica Andrés Bello – UCAB – Caracas – Venezuela) – Alexandre de Moraes (Universidade de São Paulo – USP – São Paulo – Brasil) – Anabelen Casares Marcos (Universidad de León – UNILEÓN – León – Espanha) – Andrea Juliana Lara (Universidad de Cuyo – UNCUYO – Mendoza – Argentina) – André Luiz Freire (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – Augusto Durán Martínez (Universidad Católica del Uruguay – UCU – Montevidéo – Uruguai) – Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto (Centro Universitário de Brasília – UniCEUB – Brasília – Brasil) – Carlos Aymerich Cano (Universidade da Coruña – UDC – Corunha – Espanha) – Carlos Bernal-Pulido (Macquarie Law School – MQ – Sydney – Austrália) – Carlos Enrique Delpiazzo Rodríguez (Universidad de Montevideo – UM – Montevidéo – Uruguai – e Universidad Católica del Uruguay – UCU – Montevidéo – Uruguai) – Clarissa Sampaio (Universidade de Fortaleza – UNIFOR – Fortaleza – Brasil) – Cláudia Viana (Universidade do Minho – UMINHO – Braga – Portugal) – Christian Bettinger (Université Paris II – Panthéon-Assas – Paris – França) – Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva (Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – Belo Horizonte – Brasil) – Daniel Ferreira (Centro Universitário Internacional – UNINTER – Curitiba – Brasil) – Daniel Wunder Hachem (Universidade Federal do Paraná – UFPR – e Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR – Curitiba – Brasil) – Edilson Pereira Nobre Júnior (Universidade Federal de Pernambuco – UFPE – Recife – Brasil) – Egon Bockmann Moreira (Universidade Federal do Paraná – UFPR – Curitiba – Brasil) – Emerson Gabardo (Universidade Federal do Paraná – UFPR – e Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR – Curitiba – Brasil) – Ezequiel Cassagne (Universidad Católica Argentina – UCA – Buenos Aires – Argentina) – Fabricio Motta (Universidade Federal de Goiás – UFG – Goiânia – Brasil) – Fernando Dias Menezes de Almeida (Universidade de São Paulo – USP – São Paulo – Brasil) – Francisco Eusebio Puerta Seguido (Universidad de Castilla-La Mancha – UCLM – Toledo – Espanha) – Francisco Hernández González (Universidad de La Laguna – ULL – San Cristóbal de La Laguna – Espanha) – Gilberto Bercovici (Universidade de São Paulo – USP – São Paulo – Brasil) – Gladys Camacho Cépeda (Universidad de Chile – UCHILE – Santiago – Chile) – Gonzalo Barrio García (Universidade da Coruña – UDC – Corunha – Espanha) – Guido Santiago Tawil (Universidad de Buenos Aires – UBA – Buenos Aires – Argentina) – Irene Patricia Nohara (Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM – e Universidade de São Paulo – USP – São Paulo – Brasil) – Jacques Chevallier (Université Paris II – Panthéon-Assas – Paris – França) – Jaime Rodríguez-Arana Muñoz (Universidade de Coruña – UDC – Corunha – Espanha) – Jaime Orlando Santofimio Gamboa (Universidad Externado de Colombia – Bogotá – Colômbia) – Javier Guiridlian Larosa (Universidad Católica Argentina – UCA – Buenos Aires – Argentina) – Jerson Carneiro Gonçalves (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC – Rio de Janeiro – Brasil) – Jose Luis Benavides Russi (Universidad de Externado de Colômbia – Bogotá – Colômbia) – José Luis Lara Arroyo (Pontifícia Universidade Católica de Chile – UC – Santiago – Chile) – José Maria Gimeno Feliu (Universidad de Zaragoza – UNIZAR – Saragoça – Espanha) – José Roberto Pimenta Oliveira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – José Sérgio da Silva Cristóvam (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Florianópolis – Brasil) – Juan David Duque Botero

(Colégio Mayor de Nuestra Señora Del Rosario – Bogotá – Colômbia) – Juan Manuel Otero Varela (Universidade Panamericana – UPANA – Cidade do México – México) – Juarez Freitas (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS – Porto Alegre – Brasil) – Karlos Manuel Navarro Medal (Universidade Nacional Autónoma de Nicaragua – UNAN – Manágua – Nicarágua) – Luis José Béjar Rivera (Universidade Panamericana – UPANA – Cidade do México – México) – Maria Del Carmen Rodriguez (Universidade da Coruña – UDC – Corunha – Espanha) – Manlio Fabio Casarín León (Universidade Veracruzana – UV – Xalapa – México) – Maria Isabel Gallego Corcoles (Universidade de Castilla-La Mancha – UCLM – Toledo – Espanha) – Maria Luz Zanvetto Mazzoni (Universidade Austral – UA – Buenos Aires – Argentina) – Mauricio Rafael Pernia Reyes (Universidade Católica del Táchira – UCAT – San Cristóbal – Venezuela) – Mauricio Zockun (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – Pablo Gutiérrez Colantuono (Universidade Nacional del Comahue – UNCOMA – Neuquén – Argentina) – Pablo Oscar Gallegos Fedriani (Universidade de Buenos Aires – UBA – Buenos Aires – Argentina) – Pablo Schiavi Muñoz (Universidade de Montevideo – UM – Montevideo – Uruguai) – Patricia Valcárcel Fernández (Universidade de Vigo – UVIGO – Vigo – Espanha) – Paulo Manuel Cunha Costa Otero (Universidade de Lisboa – ULISBOA – Lisboa – Portugal) – Pedro Costa Gonçalves (Universidade de Coimbra – UC – Coimbra – Portugal) – Pedro Estevam Pinto Serrano (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – Rafael Acevedo (Universidade de Vigo – UVIGO – Vigo – Espanha) – Rafael Dickson Morales (Universidade Iberoamericana – UNIBE – Santo Domingo – República Dominicana) – Sérgio Antônio Silva Guerra (Fundação Getúlio Vargas – FGV – Rio de Janeiro – Brasil) – Shirlei Silmara de Freitas Mello (Universidade Federal de Uberlândia – UFU – Uberlândia – Brasil) – Silvio Luis Ferreira da Rocha (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – Thiago Marrara (Universidade de São Paulo – USP – Ribeirão Preto – Brasil) – Toni Jaeger-Fine (Fordham University – FU – Nova Iorque – Estados Unidos da América) – Vladimir da Rocha França (Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – Natal – Brasil) – Ximena Lazo Vitoria (Universidade de Alcalá – UAH – Madri – Espanha).

Conselho Consultivo
Consulting Council

**Presidente do Conselho Consultivo: Felipe Nogueira Monteiro –
Harvard University Law School (Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos)**

Ada Pellegrini Grinover in memoriam (Universidade de São Paulo – USP – São Paulo – Brasil) – Alexandre Santos de Aragão (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ – Rio de Janeiro – Brasil) – Armando Rovai (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – Bruno Dario Werneck – (Fundação Getúlio Vargas – FGV – São Paulo – Brasil) – Carlos Ari Sundfeld (Fundação Getúlio Vargas – FGV – São Paulo – Brasil) – Clóvis Beznos (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – Daniela Campos Libório (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – Edgard Hermelino Leite Júnior (Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura – IBEJI – São Paulo – Brasil) – Edimur Ferreira de Faria (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC-Minas – Belo Horizonte – Brasil) – Evane Beigelman Kramer (Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM – São Paulo – Brasil) – Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto (Universidade de São Paulo – USP – São Paulo – Brasil) – Gustavo Henrique Justino de Oliveira – (Universidade de São Paulo – USP – São Paulo – Brasil) – Inês Coimbra de Almeida Prado (Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura – IBEJI – São Paulo – Brasil) – Ives Gandra da Silva Martins (Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM – São Paulo – Brasil) – João Negrini Neto (Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura – IBEJI – São Paulo – Brasil) – José Eduardo Martins Cardozo (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – José Virgílio Lopes Enei – (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC – Rio de Janeiro – Brasil) – Kleber Zanchim – (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC – Rio de Janeiro – Brasil) – Marcelo Figueiredo (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – Márcio Cammarosano (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – Marcos Augusto Perez (Universidade de São Paulo – USP – São Paulo – Brasil) – Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Universidade de São Paulo – USP – São Paulo – Brasil) – Percival José Bariani Júnior (Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura – IBEJI – São Paulo – Brasil) – Sérgio Ferraz (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio – Rio de Janeiro – Brasil) – Tácio Lacerda Gama (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP – São Paulo – Brasil) – Tercio Sampaio Ferraz Júnior (Universidade de São Paulo – USP – São Paulo – Brasil).

REVISTA DE
**DIREITO ADMINISTRATIVO,
INFRAESTRUTURA,
REGULAÇÃO E COMPLIANCE**

Journal of Administrative Law, Infrastructure, Regulation and Compliance

Ano 6 • n. 20 • jan./mar. 2022

N. 6 • Issue 20 • Jan./March 2022

Coordenação

AUGUSTO NEVES DAL POZZO

RICARDO MARCONDES MARTINS

Editor-Chefe

ALEXANDRE GODOY DOTTA

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

ISSN 2526-8120

REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUTURA, REGULAÇÃO E COMPLIANCE

Journal of Administrative Law, Infrastructure, Regulation and Compliance

Ano 6 • n. 20 • jan./mar. 2022

N. 6 • Issue 20 • Jan./March 2022

Coordenação

AUGUSTO NEVES DAL POZZO
RICARDO MARCONDES MARTINS

Editor-Chefe

ALEXANDRE GODOY DOTTA

Os colaboradores desta Revista gozam da mais ampla liberdade de opinião e de crítica, cabendo-lhes a responsabilidade pelas ideias e dos conceitos emitidos em seus trabalhos.

© 2022 edição e distribuição da
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA.

JULIANA MAYUMI ONO
Diretora responsável

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 – 13º andar – Vila Olímpia
CEP 04548-005, São Paulo, SP, Brasil

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo – Lei 9.610/1998.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO THOMSON REUTERS SELO REVISTA DOS TRIBUNAIS
(atendimento, em dias úteis, das 9h às 18h)

Tel.: 0800-702-2433

e-mail de atendimento ao consumidor:
sacrt@thomsonreuters.com

e-mail para submissão de originais:
www.r dai.com.br

Conheça mais sobre Thomson Reuters
www.thomsonreuters.com.br

Acesse o nosso *eComm*
www.livrariart.com.br

Impresso no Brasil: [02.2022]

Profissional

Fechamento desta edição: [16.12.2021]



ISBN 978-65-5991-397-8

REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUTURA, REGULAÇÃO E COMPLIANCE

Journal of Administrative Law, Infrastructure, Regulation and Compliance

Ano 6 • n. 20 • jan./mar. 2022

N. 6 • Issue 20 • Jan./March 2022

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

JULIANA MAYUMI ONO

Gerente de Conteúdo

MILISA CRISTINE ROMERA

Editorial: Aline Marchesi da Silva, Camilla Sampaio, Diego Garcia Mendonça, Emanuel Silva, Karolina de Albuquerque Araújo Martino e Quenia Becker

Gerente de Conteúdo Tax: Vanessa Miranda de M. Pereira

Direitos Autorais: Viviane M. C. Carmezim

Assistente de Conteúdo Editorial: Juliana Menezes Drumond

Analista de Conteúdo Editorial Júnior: Bárbara Baraldi

Estagiárias: Ana Amalia Strojnowski, Mariane Cordeiro e Mirna Adel Nasser

Produção Editorial

Gerente de Conteúdo

ANDRÉIA R. SCHNEIDER NUNES CARVALHAES

Especialistas Editoriais: Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos e Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Thyara Pina da Silva

Analistas de Operações Editoriais: Caroline Vieira, Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Mariana Plastino Andrade, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra e Vanessa Mafra

Analistas de Qualidade Editorial: Ana Paula Cavalcanti, Fernanda Lessa, Gabriela Cavalcante Lino e Victória Menezes Pereira

Estagiárias: Bianca Satie Abduch, Gabrielly N. C. Saraiva, Maria Carolina Ferreira e Sofia Mattos

Capa: Linotec

Imagem da Capa: Freepik.com

Lider de Inovações de Conteúdo para Print

CAMILLA FUREGATO DA SILVA

Visual Law: Maria Angélica Leite, Max Costa e Renata Barowski

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

MARCELLO ANTONIO MASTROROSA PEDRO

Analistas: Gabriel George Martins, Jonatan Souza, Maria Cristina Lopes Araujo e Rodrigo Araujo

Gerente de Operações e Produção Gráfica

MAURICIO ALVES MONTE

Analistas de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis e Jéssica Maria Ferreira Bueno

Assistente de Produção Gráfica: Ana Paula de Araújo Evangelista

LINHA EDITORIAL

EDITORIAL LINE

A *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura – RDAI* – tem por objetivo o aprofundamento do Direito Administrativo, com ênfase no tema da Infraestrutura. Assume uma perspectiva normativista do fenômeno jurídico: considera ser o direito um conjunto de normas vigentes em determinado território. O objeto central da *Revista* são as normas vigentes no território brasileiro, ou seja, o Direito brasileiro. Adota, ademais, como premissa teórica fundamental que o referido conjunto de normas compõe um sistema, dotado de unidade, completude e coerência, com estrutura hierárquica, tendo no ápice as normas constitucionais, de modo que a incompatibilidade de uma norma inferior com a superior leva à invalidade da primeira. Considera, assim, possível um estudo científico desse conjunto normativo, com o intuito de apurar: a) quais normas compõem o sistema normativo; b) qual o sentido e o alcance dessas normas; c) quais delas são inválidas por incompatibilidade com as normas superiores.

A *RDAI* assume uma perspectiva *neoconstitucional*, acreditando que o sistema normativo consagra uma ordem objetiva de valores, vinculante para todos os operadores do Direito; e uma premissa *concretista*, no sentido de que toda interpretação normativa é condicionada pela realidade perante a qual a norma será aplicada. A partir dessas premissas, tendo por norte, em especial, a possibilidade de uma análise científica do Direito – cuja missão principal, insiste-se, é apurar as normas existentes, fixar seu conteúdo e alcance e identificar quais são válidas –, a *RDAI* assume a missão de contribuir para o progresso da Ciência do Direito Administrativo brasileiro. Como desdobramento necessário de sua missão primordial, preordena-se a contribuir para a difusão da compreensão correta das normas de Direito Administrativo e, com isso, para o aprimoramento das relações entre a Administração e o administrado.

Parte também a *RDAI* de uma perspectiva *ético-constitutivista*, no sentido de que a interpretação correta, a ser revelada pela Ciência do Direito, dá-se a partir da contraposição de ideias, em um incessante debate entre os estudiosos do tema. Tendo em vista isso, adota uma postura radicalmente *pluralista e democrática*. Não se filia a uma prévia ideologia ou a uma específica corrente doutrinária. Pelo contrário: assume como pressuposto para o desenvolvimento científico a

necessária compreensão das diversas correntes de pensamento. A atividade científica exige a análise crítica séria e esta pressupõe o conhecimento das posições divergentes. Essa perspectiva é aqui enfatizada: por pressuposição teórica fundamental, a RDAI fomenta a publicação de posições teóricas diversas, alicerçadas em premissas conceituais diferentes. A interpretação correta será descoberta, acredita-se, não pela revelação de um doutrinador, a partir de uma inspiração individual, mas pelo debate entre os estudiosos do tema, o enfrentamento respeitoso dos argumentos e contra-argumentos.

Reconhece, outrossim, como premissa a importância do Direito comparado para a correta compreensão das normas brasileiras. Sem desconsiderar a aludida perspectiva concretista, e o condicionamento da realidade do local a ela inerente, muitos dos institutos incorporados na legislação brasileira foram e são debatidos no direito alienígena. Ademais, muitos dos problemas enfrentados pela Administração e pelos administrados brasileiros são similares aos enfrentados em outros Estados. As reflexões referentes ao direito estrangeiro são, pois, assumidas como fundamentais para o desenvolvimento científico nacional. A RDAI possui, conseqüentemente, o intuito de difundir estudos científicos estrangeiros referentes à temática da revista.

A RDAI enfatiza o tema da infraestrutura, considerada elemento estrutural necessário ao desenvolvimento da sociedade contemporânea, por exemplo, o sistema de transportes – rodovias, transporte coletivo, ferrovias, portos, aeroportos –, saneamento básico – esgotamento sanitário, rede de distribuição de água, coleta e tratamento de lixo, drenagem –, iluminação pública, comunicação – correios e telegráficos, telecomunicações, radiodifusão de sons e de sons e imagens –, produção e distribuição de energia – petróleo, gás natural, pré-sal, hidrelétricas. A partir dessa exemplificação, evidencia-se a vastidão da temática da infraestrutura. O aprofundamento teórico de seu regime jurídico é vital para o aumento da segurança jurídica e, por conseguinte, para o maior desenvolvimento econômico do País.

A infraestrutura impacta, diariamente, a vida das pessoas. Aliar o desenvolvimento econômico com a melhoria de qualidade de vida é o maior desafio imposto àqueles que têm o dever de aperfeiçoar a infraestrutura nacional. O estudo comparado, nesse aspecto, revela os acertos e os desacertos de grandes projetos de infraestrutura realizados ao redor do mundo, viabilizando, com as devidas adaptações, sua adequada implantação em nosso país. Desenvolver projetos de infraestrutura que atendam às expectativas da sociedade e propiciem resultados concretos satisfatórios, alterando beneficentemente a vida do cidadão e permitindo que o País seja competitivo no mercado internacional, é o objetivo principal a ser alcançado pelo aprofundamento científico das respectivas normas setoriais.

Apesar da ênfase temática, a *RDAI* é primeiro uma *Revista de Direito Administrativo* e, só em segundo lugar, de Infraestrutura. A ordem aí tem sua razão de ser: destina-se ao aprofundamento teórico de todos os temas relacionados ao Direito Administrativo e não apenas da temática diretamente associada à infraestrutura. Isso porque todos eles, de forma mais ou menos direta, interferem nela. Deveras, é intuitivo que cada um dos campos setoriais da infraestrutura está intimamente associado a toda temática do direito administrativo. A título de exemplo, todo setor de infraestrutura está vinculado aos temas dos serviços públicos, bens públicos, agentes públicos, organização administrativa etc.

O estudo da Ciência do Direito Administrativo, com ênfase na temática da infraestrutura, exige o aprofundamento da teoria do direito. Esse aspecto é, comumente, desconsiderado nas publicações especializadas da área, mas é a tônica da linha editorial da *RDAI*. Sua vocação científica valoriza a análise conceitual e, pois, o aprofundamento dos institutos à luz da teoria do direito. Justamente por isso, a *Revista* abre-se para publicação de estudos de teoria do direito considerados importantes para o progresso científico do Direito Administrativo.

Acredita-se que os objetivos da *Revista* não serão atingidos apenas com a publicação de artigos científicos. Outras abordagens mostram-se bastante eficazes para o aprofundamento do debate científico. A *RDAI* pretende, por isso, publicar: a) pareceres; b) comentários jurisprudenciais; c) resenhas bibliográficas; d) breves comentários de doutrina; e) entrevistas com grandes nomes do Direito Administrativo brasileiro e da Infraestrutura; f) recentes diplomas normativos; g) comentários a textos normativos.

O Direito Administrativo e o Direito da Infraestrutura constroem-se não apenas na Academia, mas na aplicação prática, no cotidiano forense e administrativo. Pareceres elaborados por juristas de escol sobre a exegese das normas administrativas possuem indiscutível valor científico. Ademais, o conhecimento e o exame de decisões judiciais e administrativas relevantes, a resenha de obras de doutrina editadas recentemente, a apresentação e os comentários de diplomas normativos recém-publicados são de extraordinária pertinência para o aprimoramento do debate. É fundamental para o cientista do direito saber quais são os novos textos normativos, como eles vêm sendo aplicados, quais as novas obras sobre o assunto. A *RDAI*, apesar de ser primordialmente uma revista científica e, por consequência, destinar-se, precipuamente, à publicação de estudos acadêmicos, abre-se, enfim, para a publicação de outras produções jurídicas consideradas úteis para o debate científico.

A Ciência é fruto de um longo processo de reflexão; não se faz Ciência com o desprezo pelos avanços até então obtidos. A *RDAI*, sensível a isso, pretende resgatar os estudos que marcaram o Direito Administrativo brasileiro. A republicação

desses estudos – verdadeiros “divisores de água” nos respectivos temas – é de grande utilidade para os cientistas. Só com a atenção devida ao que já se produziu pode-se ir adiante. Não se trata apenas de uma homenagem àqueles que fizeram a Ciência avançar, e sim de um relevante serviço aos pesquisadores e operadores do Direito. Por evidente, a revisitação desses magníficos trabalhos facilita seu acesso à juventude acadêmica, o que pode ser de inestimável préstimo ao progresso científico.

Com essa linha editorial, os Coordenadores têm absoluta convicção de que a *RDAI* cumprirá sua missão. Sem embargo, este veículo só cumprirá seu papel se contribuir de alguma forma para que o Estado brasileiro atinja seus objetivos constitucionais, discriminados no art. 3º da CF/1988. Em última análise, a *Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura* invoca para si os mesmos objetivos impostos ao Estado brasileiro: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pelas premissas aqui fixadas, o trabalho não se realizará individualmente. Todos, sem exceção, cientistas e operadores do Direito, independente do partido, da ideologia ou da linha de pensamento, estão convidados a embarcar nessa grande viagem rumo ao aprofundamento científico desse ramo fundamental das ciências jurídicas.

AUGUSTO NEVES DAL POZZO
RICARDO MARCONDES MARTINS
Coordenadores

APRESENTAÇÃO

INTRODUCTION

É com grande felicidade que apresentamos o número 20 da *Revista de Direito Administrativo, Infraestrutura, Regulação e Compliance – RDAI*, dividido em seis seções.

A primeira seção, destinada ao Direito Administrativo, é subdividida em quatro subseções. A primeira subseção tem por objeto as licitações e os contratos administrativos e traz três trabalhos. O primeiro, intitulado “Sistema de Registro de Preços na Lei 14.133/2021: deveres e obrigações da Administração Pública para com o fornecedor”, de autoria da Mestra Gabriela Pércio, Professora do Centro Universitário Curitiba (Paraná), apresenta relevante contribuição científica sobre o sistema de registro de preços. O segundo, intitulado “*Contracting out is in* – a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e o aperfeiçoamento do ambiente institucional para a ampliação do uso da contratação pública como meio de implementação de políticas públicas”, de autoria do Doutor Thiago Lima Breus, Professor da Universidade Federal do Paraná – UFPR, examina a implementação de políticas públicas à luz da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O terceiro, intitulado “Tecnologia e inovação na gestão pública: enfrentamento de crises com transparência e participação popular no âmbito da Lei 13.979/2020”, de autoria do Doutor José Osório do Nascimento Neto, Professor do Programa Pesquisa Produtividade da Faculdade Estácio Curitiba (Paraná), e do Especialista João Paulo Machado Piratelli, examina as contratações públicas e a Lei da Covid.

A segunda subseção tem por objeto o Direito Administrativo Sancionador e traz o trabalho denominado “Sistema de responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa: críticas à Lei 14.230/2021”, de autoria dos Professores Doutores José Roberto Pimenta Oliveira e Dinorá Adelaide Musetti Grotti, ambos da PUC-SP, no qual examinam a responsabilização por improbidade administrativa à luz das alterações realizadas pela Lei 14.230/2021.

A terceira subseção tem por objeto a intervenção do Estado no domínio econômico e social e traz o trabalho intitulado “Crise do serviço público de educação no contexto da pandemia: implementação de infraestrutura para a melhoria do ensino mediante logística digital em prol da inclusão universalizada e da

igualdade material”, de autoria do Doutor Luiz Alberto Blanchet, Professor da PUCPR (Paraná), e da Especialista Melissa Trento, no qual examinam o relevante e atual tema da implementação da educação pública digital.

A quarta subseção tem por objeto o controle e traz o trabalho intitulado “Revisitando nosso sistema de freios e contrapesos: conflito de atribuição, Poderes do Estado e jurisdição constitucional”, de autoria do Doutor Daniel Guimarães Zveibil, no qual examina com proficiência o conflito entre os Poderes Públicos, em especial tendo em vista a pandemia da Covid-19, teoriza o que chama de “conflito de atribuição”, e propõe a releitura da Constituição. O trabalho, especialmente escrito para a RDAI, retoma a magistral tese de doutoramento do autor, recentemente publicada pela Editora Dialética – *Conflito de atribuição entre poderes do Estado: a tutela judicial do sistema de freios e contrapesos como questão principal*.

A segunda seção, seguindo um padrão estabelecido desde o primeiro número da RDAI, traz trabalhos da doutrina estrangeira. Neste número são publicados quatro trabalhos. O primeiro, intitulado “Imparcialidade Administrativa e Controle Jurisdicional da Decisão”, de autoria do Doutor David Duarte, Professor da Universidade de Lisboa (Portugal), dá continuidade ao estudo publicado na RDAI 19 sobre a “imparcialidade administrativa”, e examina o controle da imparcialidade. Dentre as diversas questões relevantes, teoriza sobre os vícios da imparcialidade, e o faz de modo profundo e inovador. Trata-se da republicação, agora no Brasil, do capítulo final do livro *Procedimentalização, participação e fundamentação: para uma concretização do princípio da imparcialidade administrativa como parâmetro decisório*, publicado em Portugal, em 1996, e há muito esgotado. O segundo, intitulado “Le patriotisme économique”, de autoria do Doutor Jacques Chevallier, Professor da Université Panthéon-Assas (França). A RDAI republica no Brasil o trabalho originariamente publicado na *La Semaine Juridique*, no qual é examinado o patriotismo econômico, tema de suma relevância para o Direito Público brasileiro. O terceiro, intitulado “Del derecho de petición a la transparencia digital en Colombia”, de autoria do Doutor Augusto Hernández Becerra, Professor da Universidad Externado de Colombia, examina, com profundidade, o direito à transparência no Direito Administrativo colombiano. O quarto, intitulado “Evolución y régimen jurídico de la responsabilidad de los contratistas”, de autoria do Doutor Jaime Pintos Santiago, Professor da Universidad a Distancia de Madrid – UDIMA (Espanha), no qual efetua denso estudo histórico da contratação pública no Direito espanhol.

A terceira seção tem por objeto a publicação de pareceres jurídicos de importância científica para o Direito Administrativo. Neste número, a RDAI publica o parecer do Doutorando Weber Luiz de Oliveira, Procurador do Estado de Santa

Catarina, no qual examina a inaplicabilidade ao adicional de férias do limite com gasto de pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A quarta seção, seguindo a proposta da linha editorial de apresentar comentários sobre as mais recentes decisões judiciais relacionadas à temática da revista, traz três comentários. O primeiro, de autoria do Doutor Guillermo Glassman, examina a decisão do STF na ADI 5.779 sobre a constitucionalidade da atuação da ANVISA sobre a produção e comercialização de inibidores de apetite de eficácia e segurança controversas. O segundo, de autoria do Doutorando Antonio Carlos Alves Pinto Serrano, examina a decisão do STF no RE 1.209.429, sobre a responsabilidade objetiva do Estado pela atuação policial durante a cobertura jornalística. O terceiro, de autoria do Mestrando Bruno Vieira da Rocha Barbirato, sobre a decisão do STF no MS 35.410/DF, em que se examina a possibilidade de apreciação de inconstitucionalidade pelos Tribunais de Contas.

A quinta seção traz entrevista inédita, especialmente concedida à RDAI, com o Doutor Fábio Ulhoa Coelho, Professor Titular de Direito Comercial da PUC-SP. Nela examina boa parte de sua riquíssima produção bibliográfica, tratando, entre outros temas, da desconsideração da personalidade jurídica, do poder, da aplicação do CDC à Administração Pública, do Direito Antitruste, do desafio kelseniano, da lógica jurídica, das empresas estatais. Esse breve panorama evidencia a amplitude e a profundidade da entrevista. Não há palavras para registrar o agradecimento da coordenação da RDAI ao Professor Fábio Ulhoa Coelho pela generosidade em nos concedê-la. Dá-se, mais uma vez, continuidade ao que foi iniciado no número 01 da RDAI: trazer ao público depoimentos de importância histórica!

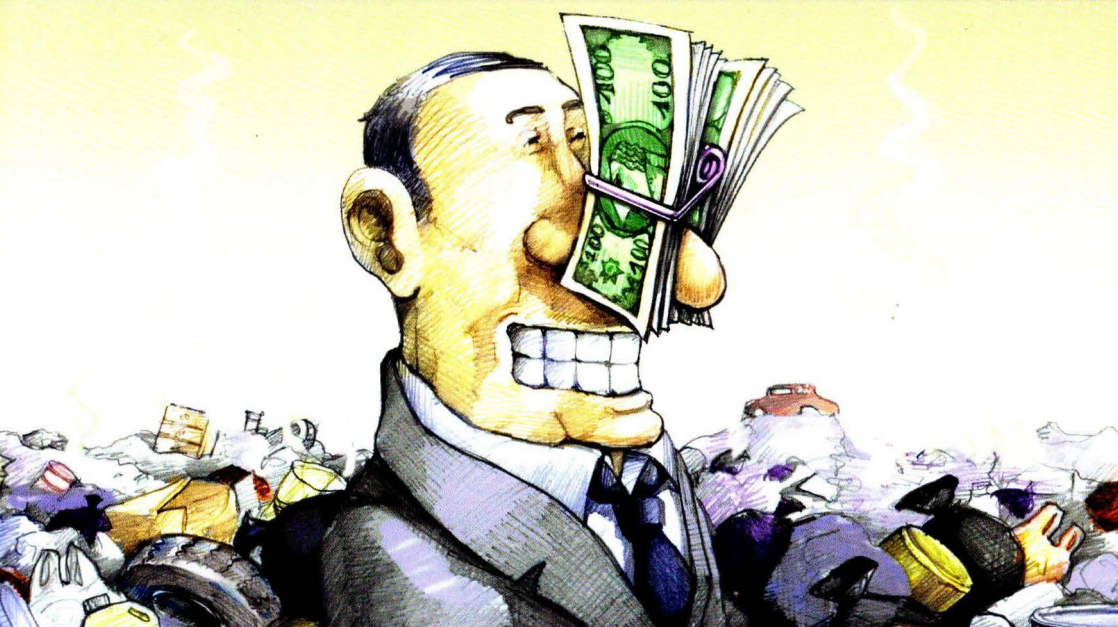
A sexta e última seção, denominada “Memória do Direito Administrativo”, traz ao público estudos que se tornaram referência na doutrina brasileira. Neste número, republicam-se dois memoráveis trabalhos. O primeiro, denominado “Intervenção em serviço público”, de autoria do Doutor Fábio Ulhoa Coelho, foi originariamente publicado em *Estudos de Direito Público* – EDP, Revista da Associação dos Advogados da Prefeitura do Município de São Paulo, no primeiro semestre de 1985. Trata-se de parecer proferido pelo autor, quando exercia o cargo de Procurador do Município de São Paulo, cujo tema é até hoje bastante atual. Com a republicação do trabalho, a RDAI presta homenagem ao Professor Fábio Ulhoa Coelho, por toda sua contribuição ao desenvolvimento científico do direito brasileiro. Publica-se, também, o trabalho denominado “Apontamentos sobre os agentes públicos”, de autoria do Doutor Celso Antônio Bandeira de Mello, publicado originariamente no número 13 da *Revista de Direito Público* – RDP, periódico publicado pela prestigiada Revista dos Tribunais, no terceiro trimestre de 1970.

A RDAI, acreditam os coordenadores, continua cumprindo plenamente sua *linha editorial*: contribuir para o aprimoramento científico do Direito Administrativo. Registra-se o agradecimento ao Doutor Alexandre Godoy Dotta pelo trabalho empreendido em prol da publicação deste número, bem como à competente equipe da Editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais.

AUGUSTO NEVES DAL POZZO
RICARDO MARCONDES MARTINS
Coordenadores

NESTA EDIÇÃO:

**PANORAMA CRÍTICO DA LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM AS
ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/2021**



REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUTURA,
REGULAÇÃO E COMPLIANCE

• **RDAI 20**

ANO 6 • n. 20 • jan. - mar. • 2022

*Journal of Administrative Law, Infrastructure,
Regulation and Compliance*

N. 6 • ISSUE 20 • Jan. - Mar. • 2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NA LEI 14.133/2021: DEVERES E OBRIGAÇÕES
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA COM O FORNECEDOR

COORDENAÇÃO

**AUGUSTO NEVES DAL POZZO E
RICARDO MARCONDES MARTINS**

THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

1912 • 2022

110
anos

REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUTURA,
REGULAÇÃO E COMPLIANCE

• RDAI 20

ANO 6 • n. 20 • jan. - mar. • 2022

*Journal of Administrative Law, Infrastructure,
Regulation and Compliance*

N. 6 • ISSUE 20 • Jan. - Mar. • 2022

Sistema de Registro de Preços na Lei 14.133/2021: deveres e obrigações da Administração Pública para com o fornecedor • *Contracting out is in* – A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e o aperfeiçoamento do ambiente institucional para a ampliação do uso da contratação pública como meio de implementação de políticas públicas • Tecnologia e inovação na gestão pública: enfrentamento de crises com transparência e participação popular no âmbito da Lei 13.979/2020 • Panorama crítico da Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações da Lei 14.230/2021 • Crise do serviço público de educação no contexto da pandemia: implementação de infraestrutura para a melhoria do ensino mediante logística digital em prol da inclusão universalizada e da igualdade material • Revisitando nosso sistema de freios e contrapesos: conflito de atribuição, Poderes do Estado e jurisdição constitucional • Imparcialidade Administrativa e Controlo Jurisdicional da Decisão • Le Patriotisme Économique • Del derecho de petición a la transparencia digital en Colombia • Evolución y régimen jurídico de la responsabilidad de los contratistas • Despesa total com pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Im)possibilidade de exclusão do terço de férias • Intervenção em Serviço Público • Apontamentos sobre os agentes públicos.

ISSN 2526-8120

ISBN 978-65-5991-397-8



9 786559 913978

Ajude-nos a melhorar
cada vez mais nossos
produtos, acesse o
QR Code e responda
nossa pesquisa!



Visual Law

THOMSON REUTERS®



THOMSON REUTERS®

